



Póker político

Matías Pascal

Un all-in de desigualdades en elección del nuevo Poder Judicial



El Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto las cartas sobre la mesa: el tope de gastos para las campañas de jueces, magistrados y ministros será de 220 mil pesos. Una cantidad que, en la mesa del póker político, parece más un farol que una apuesta real para garantizar equidad en la contienda.

Quienes ya llevan meses promoviendo su imagen han jugado su mano con libertad, sin límite de apuestas, mientras que quienes apenas se sentarán a la mesa con este presupuesto, lo harán con fichas contadas y bajo una lupa que, hasta ahora, ha sido selectiva en su aplicación. La pregunta es clara: ¿todos los jugadores están compitiendo en igualdad de condiciones?

El chip leader de la contienda

En cualquier torneo de

póker, el jugador con más fichas tiene una ventaja determinante. En esta elección, algunos aspirantes han acumulado un stack considerable gracias a eventos, foros y giras que, aunque no se llamaban campaña, tenían el mismo objetivo: posicionar su imagen ante la opinión pública.

El INE, como el crupier de esta partida, llega tarde a poner reglas cuando algunos ya llevan varias rondas apostando sin restricciones. Ahora, con el nuevo tope de gastos, la intención es que nadie haga un raise desmedido, pero la pregunta es si realmente se va a fiscalizar de manera efectiva.

Porque no sólo se trata del dinero que oficialmente se gasta, sino de los recursos en especie que pueden inclinar la balanza. Si un candidato recibe promo-

ción disfrazada de "acto institucional", ¿eso cuenta dentro del tope? Si un grupo de simpatizantes organiza eventos "voluntarios" para apoyarlo, ¿el INE lo considerará un gasto?

El bluff de la equidad electoral

En teoría, el INE será el garante de que nadie haga trampa. Pero en la práctica, los comodines ya están en juego. El uso del aparato institucional por parte de algunos candidatos en funciones es un secreto a voces, y la vigilancia sobre estos "gastos ocultos" ha sido, en el mejor de los casos, laxa.

Si esta elección fuera una partida justa, todos deberían haber empezado con las mismas fichas y bajo las mismas reglas desde el principio. Sin embargo, mientras unos han apostado sin restricciones, otros tendrán que administrar cuidadosamente cada peso de su reducido stack, evitando caer en bancarrota antes del final del torneo.

¿Quién va a hacer el showdown?

El momento de la verdad en el póker llega cuando los jugadores muestran sus cartas y se determina quién gana la mano. En esta elección, el INE tendrá que demostrar si realmente es un árbitro imparcial o si su intervención es sólo un gesto simbólico que llega cuando ya no hay manera de nivelar la contienda.

Porque imponer un tope de gastos no es suficiente si no se fiscaliza con rigor. Si hay candidatos que rebasan el límite, ¿serán realmente sancionados o sólo recibirán un regaño mediático? Si se permite que algunos jueguen con ventajas disfrazadas de apoyos "espontáneos", el resultado de la elección estará marcado antes de que termine la partida.

Conclusión: un torneo marcado desde el principio

En esta contienda, no todos los jugadores han recibido el mismo trato. Algunos han tenido meses para construir su imagen sin restricciones, mientras que otros apenas comienzan con un presupuesto que apenas les permitirá pagar la ciega mínima.

Si el INE quiere demostrar que su intervención no es sólo un bluff, deberá vigilar cada movimiento con la misma severidad, sin importar quién esté apostando fuerte o quién parezca tener la mejor mano. De lo contrario, este proceso quedará marcado como una partida donde las cartas ya estaban repartidas desde antes de que todos se sentaran a la mesa. ¡Ciaoooo!

